

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CATALUÑA  
(PRIMER SEMESTRE 2020)**

—

**DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CATALUNYA  
(PRIMER SEMESTRE 2020)**

MARÍA INÉS GIL CASIÓN

*Profesora asociada de Derecho Administrativo*

*Universitat Rovira i Virgili*

**Sumario:** 1. Introducción 2. La Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios 3. La Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura 4. El Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables 5. Iniciativas legislativas, proyectos de ley, proposiciones de ley y proposiciones de iniciativa legislativa popular, actualmente en trámite en el Parlamento de Cataluña 6. El Acuerdo GOV/24/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el documento de base del Acuerdo nacional para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en Cataluña 7. Otra actividad gubernativa destacable en materia ambiental: Cataluña aprueba el plan de Inspección Ambiental Integrada para el período 2020 8. Ordenación del territorio: Cataluña aprueba la Orden para la normalización de las claves urbanísticas y requerimientos técnicos de presentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 9. Otras normas y actuaciones de interés en materia ambiental.

## 1. INTRODUCCIÓN

En el periodo examinado (del 31 de octubre de 2019 al 30 de abril de 2020), en cuanto a la función legislativa se refiere, podemos decir que se ha reinstaurado cierta normalidad. Si en crónicas precedentes hablábamos de escasez de producción normativa consecuencia de la excepcionalidad política, este semestre una vez iniciada de la XII Legislatura, con la toma de posesión del nuevo ejecutivo y levantada la suspensión de la autonomía política de Cataluña, podemos afirmar que la "sequía normativa" en materia ambiental se ha paliado. Son dos leyes ordinarias y un decreto ley, los que vienen a incorporarse al cuerpo legal de la materia ambiental, este primer semestre de 2020.

Además, a los efectos que nos interesan, el semestre que es objeto de esta crónica también alcanza a la acción de gobierno del ejecutivo, el cual ha aprobado diversas disposiciones con rango reglamentario de incidencia directa en materia ambiental.

Cabe tener en cuenta también, que se continúan implementando diversos instrumentos de fomento dirigidos a administraciones públicas y particulares para realizar actuaciones ligadas a la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible.

Finalmente hay que destacar que la crisis sanitaria derivada de la pandemia por el COVID-19 en la que aún estamos inmersos estos días, ha provocado la suspensión de la actividad parlamentaria y la ralentización en la tramitación de instrumentos normativos a partir de mediados del mes de marzo.

## **2. LA LEY 3/2020, DE 11 DE MARZO, DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPILFARRO ALIMENTARIOS**

En el DOGC Núm. 8084 de fecha de 13 de marzo de 2020, se publica la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios<sup>1</sup>.

El principal objetivo de la Ley es la prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios para evitar que la sobreproducción o los excedentes de alimentos se conviertan en residuos<sup>2</sup>.

En la exposición de motivos, se constata que el despilfarro alimentario es un problema que en los últimos años ha adquirido mucha relevancia tanto en el ámbito político como en el social. Se ha incrementado la conciencia social sobre el hecho de que hay que luchar contra las pérdidas y el despilfarro de alimentos que se generan a lo largo de la cadena alimentaria. Los modelos predominantes de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos son incapaces de resolver los problemas de seguridad y soberanía alimentarias de la población mundial.

La dieta de casi novecientos millones de personas es insuficiente y pobre, mientras un tercio del primer mundo sufre obesidad debido a una ingesta excesiva o inadecuada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se estima que un tercio de todos los alimentos producidos en el ámbito mundial se pierden o se despilfarran<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Aprobada por el Pleno del Parlamento catalán el día 4 de marzo por unanimidad.

<sup>2</sup> Generalitat de Catalunya i Agència de Residus de Catalunya. Un consumo responsable de los alimentos. (2016). 1st ed. [ebook]. Disponible en: <[http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cata%20del%20reciclatge%20\(CCR\)/guia\\_consum\\_responsable\\_ES.pdf](http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20cata%20del%20reciclatge%20(CCR)/guia_consum_responsable_ES.pdf)> (fecha última consulta: 02/05/2020). La Agencia de Residuos de Cataluña cuantifica el despilfarro alimentario en la distribución minorista, la restauración y los hogares, identifica sus causas y plantea propuestas de actuación para reducirlo. Las principales conclusiones son que en Cataluña se despilfarran anualmente más de 260.000 toneladas de alimentos, que corresponden al 7% de lo que adquieren las familias, los restaurantes y los comercios y que equivalen a treinta y cinco kilos de alimentos per cápita. La mayor parte del despilfarro (58%) se produce en los hogares, seguido de los supermercados (16%), la hostelería (12%), el comercio minorista (9%), los caterings (4%) y los mercados municipales (1%). En el ámbito doméstico, las principales causas que influyen en el despilfarro alimentario son la falta de concienciación sobre lo que se tira, la poca planificación de las compras, la falta de conocimiento sobre las técnicas de almacenamiento, la confusión sobre las fechas de caducidad y de consumo preferente, y los formatos de las raciones que pueden adquirirse en los supermercados.

<sup>3</sup> Se puede ver en <<http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/>> (fecha última consulta: 02/05/2020).

Las pérdidas y el despilfarro alimentarios debilitan la economía, hacen menos competitivas las empresas, aumentan el gasto del hogar y obligan a la Administración a destinar recursos para gestionar los residuos alimentarios. Además, tienen como efectos la reducción de las tierras fértiles disponibles, la pérdida de la diversidad biológica, el exceso de uso de agua potable y energía y el incremento de la generación de residuos, y son una de las causas del cambio climático. Aunque, no obstante, lo anterior, en determinadas condiciones, las partes comestibles de los alimentos que quedan en la propia explotación ya sean reincorporadas al suelo o utilizadas para realizar compostaje in situ, pueden contribuir al desarrollo de sistemas productivos respetuosos con la conservación de la biodiversidad y el medio.

Cada año en la Unión Europea se despilfarran unos ochenta y ocho millones de toneladas de alimentos, y se prevé que esta cifra aumentará exponencialmente si no se adoptan medidas preventivas. Los costes del despilfarro son de tipo económico y medioambiental y afectan a los consumidores, a los agentes de la cadena alimentaria y a las entidades de iniciativa social. Además, el coste medioambiental repercute en el conjunto de la sociedad, principalmente mediante la creciente escasez de recursos y los efectos sobre el cambio climático.

En el ámbito europeo no existe una normativa armonizada en esta materia: aunque ha habido numerosos intentos para legislarla, solamente se ha logrado el establecimiento de algunas medidas en política agrícola común, tales como la supresión de las subvenciones a la exportación, que probablemente ha ayudado a prevenir una sobreproducción, o el programa de consumo de fruta y leche impulsado en las escuelas para fomentar buenos hábitos alimentarios entre los niños y jóvenes, que puede ir acompañado de medidas educativas que fomenten la prevención del despilfarro alimentario. Ahora bien, sí existe un documento que puede actuar como marco orientador en la materia, la Resolución de 19 de enero de 2012 del Parlamento Europeo<sup>4</sup> sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la Unión

---

<sup>4</sup> P7TA (2012)0014 Cómo evitar el desperdicio de alimentos. Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE (2011/2175(INI)).

Europea, que indica que la lucha contra el despilfarro alimentario debe convertirse en una prioridad en el ámbito europeo.

De hecho, dentro del paquete de economía circular, la reciente Directiva 2018/851/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos<sup>5</sup>, obliga a los estados miembros a elaborar programas de prevención de residuos alimentarios y a aplicar medidas para reducir la generación de residuos alimentarios, dentro del compromiso de la Unión Europea y sus países miembros de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, de reducir a la mitad los residuos de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y en el ámbito del consumo, así como reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas después de la cosecha.

Se reconoce en la exposición de motivos, que la presente ley no puede incluir medidas en el ámbito de la política agrícola común, la política pesquera o la de seguridad alimentaria, ya que quedan fuera del alcance de las competencias de la Generalidad. Sin embargo, pretende concienciar sobre el problema del despilfarro alimentario y habilitar algunas herramientas que posibiliten su prevención, con la aplicación de la jerarquía de prioridades que inspira la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos<sup>6</sup>, y promover medidas que incentiven la reducción del despilfarro como, por ejemplo, el establecimiento de acuerdos entre empresas distribuidoras y entidades de iniciativa social.

Las definiciones de la Ley respetan los conceptos aplicables de conformidad con la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano; la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos ya citada, modificada por la Directiva 2018/851, de 30 de mayo; el Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria; el Reglamento 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria

---

<sup>5</sup> Diario Oficial de la Unión Europea de 14.6.2018. L 150/109.

<sup>6</sup> Diario Oficial de la Unión Europea de 22.11.2008. L 312/3.

facilitada al consumidor; la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, y el Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.

También es voluntad de la Administración trabajar en el diseño de indicadores de evaluación; elaborar y difundir guías de buenas prácticas para reducir las pérdidas y el despilfarro de alimentos de los agentes de la cadena alimentaria; desarrollar campañas de información dirigidas a consumidores y restauración; promover acuerdos de cumplimiento voluntario; desarrollar la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades de iniciativa social; fomentar los canales cortos de comercialización, y fomentar las auditorías sectoriales o de empresas y el diseño y desarrollo de nuevos proyectos que permitan mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de alimentos.

En cuanto a la estructura de la Ley, consta de quince artículos, organizados en cuatro capítulos. El capítulo I, Disposiciones generales, incorpora el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación y las definiciones de los conceptos.

El capítulo II, Obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria, establece las obligaciones de las empresas de la cadena alimentaria, de las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro, de las empresas del sector de la restauración y la hostelería y de la propia Administración y el sector públicos.

Entre estas obligaciones está la de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios y aplicarlo, en los términos que se establezcan por reglamento; reducir, medir e informar anualmente sobre la cuantificación de las pérdidas y el despilfarro alimentarios y evitar actuaciones orientadas a dejar los alimentos en condiciones no aptas para su consumo o valorización.

También establece las obligaciones de las empresas del sector de la restauración y la hostelería, destacadamente la promoción del consumo de productos de temporada y de proximidad; facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido y utilizar

envases, para el traslado de los alimentos no consumidos, que sean aptos para el uso alimentario, reutilizables, compostables o fácilmente reciclables.

Entre las obligaciones de la Administración pública el texto señala las de incorporar, en los contratos públicos y los convenios de gestión de servicios relacionados con la gestión de alimentos, cláusulas para prevenir las pérdidas y el despilfarro alimentarios, así como facilitar la creación de espacios y de sistemas para la distribución de los excedentes alimentarios.

A las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la distribución de alimentos se les imponen, entre otras, la obligación de mantener unas correctas prácticas de higiene en la conservación y la manipulación de los alimentos y de disponer de los elementos y las infraestructuras necesarios para conservar, manipular y distribuir los alimentos en condiciones óptimas, especialmente los productos frescos.

La norma hace también referencia a la jerarquía de prioridades a la que deben adaptar sus actuaciones los distintos agentes de la cadena alimentaria: prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios; utilización para la alimentación humana; utilización para la alimentación animal; valorización material mediante la recuperación de elementos y sustancias contenidas en los residuos alimentarios para usos industriales; valorización material mediante la obtención de compost de calidad; valorización energética mediante la obtención de biogás; otros tipos de valorización energética, y eliminación.

El capítulo III, Prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, establece medidas de apoyo y fomento del Gobierno para prevenir el despilfarro alimentario.

En este ámbito la norma impone al Gobierno, con la colaboración del Consejo Catalán de la Alimentación, la elaboración del Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, que debe actualizarse con una periodicidad máxima de cinco años, señalando los datos que el mismo debe contener.

Además, especifica aquellas acciones que deben llevar a cabo Administración pública y empresas alimentarias para prevenir las pérdidas y el despilfarro

alimentarios, tales como campañas informativas y de sensibilización para concienciar sobre la necesidad de favorecer un consumo responsable; fomentar que las fechas de consumo preferente se fijen de forma responsable, e incentivar el aprovechamiento de alimentos con la fecha de consumo preferente superada.

Por su parte, la Administración debe trabajar en el diseño de indicadores de evaluación; elaborar y difundir guías de buenas prácticas para reducir las pérdidas y el despilfarro de alimentos de los agentes de la cadena alimentaria; desarrollar campañas de información dirigidas a consumidores y restauración; promover acuerdos de cumplimiento voluntario; desarrollar la colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades de iniciativa social; fomentar los canales cortos de comercialización, y fomentar las auditorías sectoriales o de empresas y el diseño y desarrollo de nuevos proyectos que permitan mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de alimentos.

Finalmente, el capítulo IV regula el régimen sancionador aplicable a la materia ordenada. La Ley se completa con dos disposiciones adicionales y siete disposiciones finales<sup>7</sup>.

En conclusión, con esta norma, Cataluña establece las prioridades a las que deben adaptar sus actuaciones los distintos agentes de la cadena alimentaria: desde la prevención de las pérdidas y el despilfarro y la utilización para la alimentación humana hasta la valorización energética mediante la obtención de biogás. Obliga a las empresas de restauración a promover el consumo de productos de temporada y de proximidad y a facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido y fomenta los bancos de alimentos. Con ello se pretende prevenir de forma efectiva las pérdidas y el despilfarro alimentarios y con ello evitar la generación de residuos y contribuir al consumo responsable.

---

<sup>7</sup> Entre ellas destaca la modificación de la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana del Consumo.



### **3. LA LEY 2/2020, DE 5 DE MARZO, DE LA VITIVINICULTURA**

En el DOGC Núm. 8080 de fecha 9 de marzo de 2020, se publica la nueva Ley catalana reguladora del sector de la vitivinicultura<sup>8</sup>.

Como se indica en la exposición de motivos de la norma, el sector de la viña y el vino tiene una importancia capital en Cataluña, tanto en la producción de uva como en la elaboración de vino, y es uno de los motores de la economía catalana. Históricamente, Cataluña ha sido desde hace siglos un país con tradición de cultivo de la viña y de elaboración de vino.

Para observar la importancia del sector vitivinícola en la economía catalana, la exposición de motivos indica que en 2018 se cosecharon en Cataluña 435 millones de kilogramos de uva, incluyendo tanto la que va destinada a las denominaciones de origen protegidas como el vino sin denominación o el que va a destilación. Más del 60% de esta uva se destina a la producción de cava. En cuanto a los vinos con denominación de origen, puede observarse que el 25% de la producción total estatal corresponde a vinos de algunas de las denominaciones de origen protegidas en el territorio catalán.

En 2017 el sector representa el 4,04% del valor de la producción final agraria (PFA) de Cataluña, y la industria vinícola, el 5,30% de la industria agroalimentaria. Por otra parte, en 2018 el peso de las exportaciones de los productos vínicos supone 624 millones de euros, cifra que representa un aumento del 2,7% con relación al año anterior. Varios son los objetivos de la presente ley. En primer lugar, debe adaptarse la Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola<sup>9</sup>, a la normativa europea resultante de la organización común del mercado del vino y, en particular, al Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de productos agrarios y por el que se derogan los reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007, y el Reglamento (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo, que completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de

---

<sup>8</sup> Entrada en vigor: El 9 de mayo de 2020. Modifica la Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola y el Decreto 474/2004, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola, salvo los artículos 3 a 14, 23 a 27, 34 a 56 y 67 a 73.

<sup>9</sup> DOGC núm. 3673, de 09/07/2002 y BOE núm. 177, de 25/07/2002.

marzo, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

En cuanto a la estructura de la Ley, esta se compone de un título preliminar, ocho títulos, once disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. En el título preliminar, además de establecer el objeto de la Ley y los principios de actuación, se exponen de forma completa toda una serie de definiciones necesarias para la comprensión de la Ley.

El título I, se dedica en concreto a implantar las grandes líneas de actuación en esta materia, como las autorizaciones de plantaciones. Además, regula las plantaciones no autorizadas y la obligación de arrancarlas, si procede. Instaura, también, una regulación de las variedades con el establecimiento de un catálogo de variedades y da rango legal al Registro vitivinícola de Cataluña como herramienta principal, junto con la tarjeta vitícola, del control en esta materia.

El título II, instituye los objetivos de las políticas en esta materia, que deben tender a mejorar la competitividad de los vinos catalanes como motor de las exportaciones y deben fomentar su diversidad y calidad. Describe el fomento de las actividades complementarias de la viticultura, como el enoturismo y las rutas vinícolas, como complemento del turismo. De la misma manera, regula la práctica enológica de autorización del aumento artificial del grado alcohólico si se dan circunstancias excepcionales.

El título III sistematiza el sistema de protección del origen de los vinos de calidad, tanto de las denominaciones de origen protegidas como de las indicaciones geográficas protegidas, y adapta su regulación a la normativa europea, que da primacía a los pliegos de condiciones como pilar central de estos distintivos de calidad.

Introduce una modificación importante respecto a los vinos de finca, en el sentido de que las bodegas no necesariamente tienen que estar en la misma finca productora, lo que potenciará estos vinos de gran calidad, pero sí deben estar dentro de la zona de la denominación de origen protegida.

Sobre los vinos sin denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, los vinos varietales elaborados, envasados, almacenados o comercializados en bodegas situadas en Cataluña, así como los vinos de finca y los vinos con término tradicional.

Asimismo, el título III regula los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas introduciendo algunas modificaciones en el régimen regulador, como son la posibilidad, elevada a rango de ley, de constituir consorcios que asuman las funciones de certificación y control o las normas que deben cumplir para la acreditación como entidades de certificación y control.

El título IV regula los productos sin denominación de origen protegida ni indicación geográfica protegida, así como los que se acogen a la nueva posibilidad de las menciones de cosecha o variedad.

El título V, determina el Instituto Catalán de la Viña y el Vino, como autoridad competente para verificar el cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas, así como el departamento competente en materia de agricultura y calidad agroalimentaria como autoridad competente en inspección y control vitícola y vinícola. Por lo tanto, la autoridad competente para el control oficial, para cualquiera de los ámbitos incluidos en este concepto, se otorga a la Administración.

También establece las obligaciones de las entidades de certificación y control y de los operadores, y regula la función inspectora, que se atribuye a la dirección general competente en materia de agricultura y a la dirección general competente en materia de calidad agroalimentaria, en función de si se trata de viticultura o de vinicultura. Se aclaran las competencias en esta materia y se centraliza dicha función inspectora en estos órganos, de acuerdo con el principio de eficiencia.

Finalmente, también en este título V se reglamentan las medidas cautelares unificando el régimen de estas con lo establecido por la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria.

El título VI, del régimen sancionador, establece el cuadro de infracciones y sanciones e incorpora las tipificadas en materia de viticultura, que no se incluían en la normativa anterior.

El título VII contiene las competencias del Instituto Catalán de la Viña y el Vino en la promoción de los productos vínicos, en la difusión, la promoción y el fomento del consumo moderado y responsable de productos vínicos, en la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica y en la experimentación, la difusión y el análisis de la producción vitícola y vinícola, además de las funciones de tutela de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas.

El título VIII fija los aspectos para tener en cuenta en el fomento de la cultura del vino y en la transferencia tecnológica. Estipula los aspectos concretos de las campañas de promoción, difusión e información relativas al sector de la viña y el vino, y de las acciones de formación de viticultores y vinicultores.

Para finalizar, las disposiciones adicionales contienen reglas con el objetivo de incrementar la efectividad de los controles de los productos vínicos, y otros relativos a las menciones a los vinos ecológicos, de producción integrada o biodinámica.

La norma, además de derogar la Ley 15/2002, deroga parcialmente el Decreto 474/2004, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola, manteniendo la vigencia de los artículos que no resultan afectados y de los que se refieren al régimen electoral de los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.

#### **4. EL DECRETO LEY 16/2019, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL IMPULSO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES**

En el DOGC Núm. 8012 de 28 de noviembre de 2019, se publica el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables<sup>10</sup>.

Con esta norma, se pretende hacer frente a la situación de emergencia climática mediante una transición ecológica y energética que permita alcanzar en el más breve plazo posible los objetivos fijados en la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático<sup>11</sup> modifica, asimismo, entre otras, la Ley de urbanismo, para facilitar la implantación de las instalaciones de aprovechamiento de energía solar y energía eólica y establece los requisitos para la autorización de instalaciones de producción de energía eólica y de energía solar fotovoltaica.

Tal y como se indica en la exposición de motivos de la norma, la acción de los poderes públicos para hacer frente al cambio climático se debe desarrollar afrontando materias y ámbitos como la energía, la vivienda, el urbanismo, la movilidad o los sectores industriales, los cuales se verán afectados de una manera u otra.

En Cataluña, según datos de 2017, el conjunto del ciclo energético (producción, transformación, transporte, distribución y consumo de energía) representa el 72% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y el 87% de las emisiones de dióxido de carbono. Estos datos muestran que para abordar la

---

<sup>10</sup> Entra en vigor el 29 de noviembre de 2019, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. Las solicitudes de autorización de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas que ya se hayan presentado a trámite en el momento de la entrada en vigor de la nueva disposición se registrarán por la normativa anterior. Y los parques eólicos ya autorizados y en funcionamiento que se sitúan total o parcialmente en espacios de la Red Natura 2000 pueden ser objeto de modificaciones que supongan una aminoración de su impacto ambiental. Estas modificaciones se rigen por las previsiones del apartado 4 del artículo 23 de la nueva norma. La modificación sólo se puede llevar a cabo si la Ponencia de energías renovables da su conformidad. Normas afectadas: El Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo y la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.

<sup>11</sup> DOGC de 3 de agosto del 2017. Un estudio sobre la norma se puede ver en: DE LA VARGA PASTOR, AITANA. "Estudio de la ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático, y análisis comparativo con otras iniciativas legislativas subestatales." *Revista Catalana de Dret Ambiental* 9.2 (2018).

lucha contra las causas del cambio climático son clave las políticas energéticas de generación y distribución, y los modelos de consumo.

La actividad legislativa y reglamentaria posterior a la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático, se ha orientado a poner en marcha instrumentos ya previstos en esta Ley y a regular nuevas herramientas jurídicas para dar respuesta a la emergencia climática.

Según establece el preámbulo de este Decreto Ley, los instrumentos ordinarios que ofrece la legislación en materia de medio ambiente, energía, y también de urbanismo, se muestran insuficientes para resolver la situación extrema a la que se ha llegado. Estos instrumentos deben reforzarse, redefinirse o ampliarse de manera urgente con el fin de encarar la emergencia climática con varios elementos que permitan, en conjunto, incrementar de manera efectiva la producción de energía mediante energías renovables y otras medidas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La urgencia de las medidas a las que hace referencia el presente Decreto ley resulta del análisis del contexto sobre el cual actúa, fundamentalmente sobre la necesidad de incrementar la generación de energías de origen renovable y la reducción de gases de efecto invernadero.

El Pacto Nacional para la Transición Energética (PNTE), aprobado por Acuerdo del Gobierno el 31 de enero de 2017 y que cuenta plenamente con el apoyo político y de la sociedad civil por el proceso participativo llevado a cabo durante su elaboración, constituye el nuevo marco de desarrollo de la política energética catalana para hacer frente a los retos de la emergencia climática en los próximos años.

Así, el PNTE presenta un nuevo escenario que va más allá del objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles y la contribución de la energía nuclear, y plantea un nuevo escenario de cierre y abandono de estas fuentes energéticas, recogiendo el objetivo específico de alcanzar un sistema energético con energías cien por cien renovables, fundamentalmente de proximidad, desnuclearizado y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050, tal y como se fija en los artículos 2 y 19 de la mencionada Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.

El PNTI plantea un nuevo modelo energético más democrático, participativo y de generación renovable distribuida donde la ciudadanía y las personas consumidoras deben situarse en el centro. Así, en el nuevo modelo energético propuesto, la ciudadanía y las empresas pasan a ser consumidoras activas con la posibilidad de poder consumir, generar, almacenar y vender energía eléctrica al mismo tiempo que gestionan su consumo.

El nuevo modelo debe permitir la agrupación y participación de estos productores/consumidores en comunidades locales de energía o como agregadores de energía. En el mismo sentido debe fomentarse la participación de la ciudadanía, las empresas y las administraciones locales en los proyectos energéticos que se implanten en el territorio. Con respecto a la energía solar, vista su modularidad, su maduración tecnológica y la caída muy significativa de los costes, debe tener la consideración de herramienta principal en el cumplimiento de los objetivos del Pacto Nacional para la Transición Energética de las personas consumidoras, ya que les permite ser, a la vez, generadoras de energía y participar en el mercado energético.

La Ley 16/2017, del 1 de agosto, recogió los criterios del Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña. En concreto, estableció como objetivos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en 2030, en un 65% en 2040 y en un 100% en 2050 y, entre sus finalidades específicas, incluyó en su artículo 2.2 la de contribuir a la transición hacia una sociedad donde el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, con un sistema energético descentralizado y con energías cien por cien renovables, fundamentalmente de proximidad, con el objetivo de conseguir un modelo económico y energético no dependiente de los combustibles fósiles ni nucleares en el año 2050. Los objetivos numéricos indicados fueron declarados inconstitucionales por la Sentencia del Tribunal Constitucional 87/2019, de 20 de junio<sup>12</sup>.

El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, octubre 2018), sobre la importancia de no rebasar el límite de los 1,5º C de incremento de la temperatura media anual del planeta respecto de la época preindustrial, constituye una nueva alerta de la comunidad científica sobre la

---

<sup>12</sup> BOE núm. 177, de 25 de julio de 2019. ECLI:ES:TC:2019:87.

urgencia de actuar de manera decidida frente al cambio climático, y establece la necesidad de reducir las emisiones globales en torno al 45% en el año 2030 respecto de los niveles de 2010 y alcanzar unas emisiones netas nulas para 2050. Igualmente, el último informe publicado de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES-2019) alerta también de la situación de declive sin precedentes en que se encuentra la naturaleza del planeta y la aceleración de la ratio de extinción de especies.

La Generalidad de Cataluña, ante la nueva alerta dada por la comunidad científica y viendo con preocupación los impactos que el cambio climático tiene y tendrá en Cataluña y en todo el planeta, entendió que era necesario tomar una mayor conciencia del riesgo que representa. De hecho, aparte de los efectos evidentes sobre los ecosistemas, los efectos previsibles del cambio climático pueden perjudicar notoriamente nuestra economía productiva, desde la afectación negativa en el funcionamiento y el mantenimiento de muchas infraestructuras a importantes alteraciones de los entornos donde se desarrollan actividades con demandas intensivas de agua o de energía. La afectación sobre la salud humana es otro elemento de especial preocupación, ya que el excesivo consumo de combustibles fósiles, en especial por el transporte en los ámbitos urbanos, además de agravar el efecto invernadero por sus emisiones de CO<sub>2</sub>, también contribuye a incrementar los niveles de NO<sub>x</sub> y PM<sub>10</sub> a la atmósfera.

En definitiva, la situación descrita plantea una serie de retos de enorme complejidad que el Gobierno de Cataluña afrontó el 14 de mayo de 2019 declarando formalmente la emergencia climática, uniéndose así a las instituciones políticas de todo el mundo que ya la habían declarado e impulsando la consecución de los objetivos en materia de mitigación establecidos en la Ley 16/2017, del cambio climático<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Con esta finalidad, el Gobierno asumió los siguientes compromisos:

Adoptar las medidas de simplificación administrativa necesarias para eliminar los obstáculos que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos en materia de mitigación del cambio climático y transición energética.

Incrementar los incentivos y priorizar las políticas y los recursos públicos destinados a la necesaria transición hacia un modelo energético cien por cien renovable, desnuclearizado y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético catalán



En este marco global normativo de la Generalidad de Cataluña y con la voluntad de acelerar el desarrollo de los instrumentos de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático, se elabora el presente Decreto ley de medidas urgentes con el fin de hacer frente a la emergencia climática.

En cuanto a la estructura del Decreto ley, éste se compone de veintitrés artículos ordenados en cuatro capítulos.

El capítulo 1 contiene las disposiciones generales y objetivos de la norma en cuanto a la adopción de medidas urgentes para hacer frente a la situación de emergencia climática, modificando en consecuencia la normativa para facilitar y simplificar la implantación de las instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar y eólica.

El capítulo 2 recoge, de forma esencial, la modificación y precisión sobre diferentes puntos recogidos en la Ley 16/2017, del cambio climático, en aspectos como los objetivos de utilización de las energías renovables en Cataluña, la irrupción de la movilidad eléctrica en el sector del transporte, el aprovechamiento del potencial de energías renovables en los puertos, o la limitación de la obtención de gas y/o petróleo mediante la fracturación hidráulica (fracking).

El capítulo 3 regula las medidas que, en relación con el objeto del Decreto ley, requieren la modificación del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado

---

y garantice el derecho al acceso a la energía como bien común, como fija la Ley 16/2017, del cambio climático.

Priorizar, en las políticas públicas, las opciones con menor impacto climático y mayor contribución a la adaptación a las condiciones derivadas del cambio climático.

Adoptar las medidas necesarias para parar la preocupante pérdida de biodiversidad y promover la recuperación de los ecosistemas. Identificar y acompañar los sectores de la economía que deben hacer una transición, sea para adaptarse a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático, sea para transformarse en actividades de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en un marco general de apuesta por la economía circular y de creación de puestos de trabajo verdes.

Asumir un modelo de movilidad urbana basado, por una parte, en el transporte público, en el vehículo compartido y en los modos de micro movilidad y, por otra, en vehículos de emisión cero. Declarar instalaciones de interés territorial estratégico las instalaciones fotovoltaicas que utilicen sistemas de captación de energía fotovoltaica avanzados y eficientes.

Elaborar, conjuntamente entre el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y el Departamento de Empresa y Conocimiento, una estrategia territorial para la implantación de las instalaciones de energía renovable, fundamentalmente eólica y fotovoltaica, necesarias para desarrollar la transición energética en Cataluña y cumplir con los objetivos de la Ley 16/2017, del cambio climático, en materia de energía. Instar al Parlamento a celebrar cada año un pleno monográfico sobre el cambio climático y su afectación en Cataluña y sobre las medidas de mitigación y adaptación que el Gobierno adopte, en especial las asociadas a la transición energética.

por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Consta de un artículo, el 5, que se divide en diez apartados. Son medidas cuya esencia se sitúa en los nuevos artículos que se añaden a la Ley de urbanismo, el 9 bis y el 48 bis. El resto de las modificaciones de la Ley de urbanismo son subsidiarias de estos nuevos artículos para facilitar su interpretación sistemática.

El nuevo artículo 9 bis regula dos supuestos en materia de los usos del suelo y de las construcciones que son de aplicación directa, es decir, que no precisan la adaptación del planeamiento urbanístico vigente para que sean aplicables en los términos legalmente establecidos. El apartado 1 de este artículo contiene una medida para facilitar la implantación de instalaciones de aprovechamiento de la energía solar sobre las cubiertas de las construcciones y los espacios de las parcelas urbanas no ocupados por las construcciones en determinadas condiciones, sin que las determinaciones urbanísticas de los planes, vigentes o futuras, sean un obstáculo.

El apartado 2 del mismo artículo recoge, en esencia, un supuesto regulado en parte en los apartados 3 y 4 del artículo 97 de la Ley de urbanismo, en materia de servicios comunes de los edificios, que se derogan. En coherencia con el objeto del Decreto ley este supuesto se amplía con otro regulado en la legislación en materia de suelo, relativo a las instalaciones que tienen por objeto reducir la demanda energética de los edificios.

Con una diferencia sustancial respecto del precedente regulado en el artículo 97 de la Ley de urbanismo, en estos casos tampoco es exigible la adecuación del planeamiento urbanístico vigente para que las instalaciones a las que hace referencia se puedan implantar de acuerdo con el proyecto autorizado. En este sentido, son normas aplicables directamente mientras sean compatibles con las normas que protejan el patrimonio cultural y el resto de los bienes protegidos por el planeamiento urbanístico de conformidad con el artículo 71 y concordantes de la mencionada Ley de urbanismo.

El nuevo artículo 48 bis, por remisión al nuevo apartado 5 bis del artículo 34, habilita los proyectos de actuación específica en suelo no urbanizable para implantar directamente infraestructuras relativas a los servicios técnicos a los que hace referencia, que forman parte del sistema urbanístico de equipamientos

comunitarios, cuando el planeamiento territorial y urbanístico no las prevé o, aunque las prevé, no las regula detalladamente. Supuestos en los que no es exigible para la formulación y autorización del proyecto la modificación del planeamiento urbanístico, ni aprobar un plan especial urbanístico autónomo o de desarrollo, tanto si se trata de una infraestructura de interés general como de interés local.

Conviene advertir que, aunque la finalidad primera del nuevo artículo es facilitar la implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y de las redes de transporte y de distribución de esta energía, se ha optado por extender esta medida a otras infraestructuras de servicios técnicos cuya necesidad no siempre es fácil de prever desde el planeamiento urbanístico con la antelación suficiente.

Se trata en definitiva de infraestructuras en supuestos donde su implantación es necesaria en suelo no urbanizable, admisibles siempre que las leyes no impidan la actuación o no esté prohibida expresamente por el planeamiento territorial y urbanístico en razón de los terrenos afectados y, en consecuencia, conviene considerar que el proyecto de actuación específica es el instrumento jurídico idóneo y suficiente para autorizar su implantación en los mencionados casos, después de valorar las diferentes alternativas posibles cuando sea exigible la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la legislación en la materia.

Finalmente, el capítulo 4 hace referencia a la simplificación de la regulación de las instalaciones de producción de energía eléctrica proveniente de energía eólica o solar fotovoltaica y quiere dar respuesta a la parálisis de facto que ha experimentado la implantación de la energía eólica en Cataluña, estancada en una potencia instalada de 1270MW cuando, a raíz de los trabajos de prospectiva energética, habría que multiplicar por diez esta cifra para alcanzar un modelo energético cien por cien renovable en el horizonte de 2050.

La disposición adicional primera contiene una modificación del Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre dirigida<sup>14</sup> a facultar a la Administración

---

<sup>14</sup> Publicado en DOGC núm. 4015 de 21 de noviembre de 2003.

hidráulica de la Generalidad de Cataluña para poder intervenir de manera inmediata en la parte catalana de las cuencas compartidas para prevenir o reparar daños al dominio público hidráulico en caso de que se produzcan episodios extremos como lluvias torrenciales, inundaciones o desbordamientos, contribuyendo a garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Así, puede ejecutar directamente o colaborar con otras administraciones en actuaciones de prevención y reparación de los daños en el dominio público hidráulico que se deriven de este tipo de episodios excepcionales, cuyo carácter extremo y severidad se aprecia como una manifestación o consecuencia del cambio climático.

#### **5. INICIATIVAS LEGISLATIVAS, PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y PROPOSICIONES DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, ACTUALMENTE EN TRÁMITE EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA**

Además de la norma anteriormente reseñada, por parte del Parlamento también se han tramitado un conjunto de iniciativas ambientales que podrían llegar a concluir en Ley del Parlamento, sea a través de textos presentados por el Gobierno (proyectos de ley), por los grupos parlamentarios y miembros del Parlamento (proposiciones de ley) o por los ciudadanos (proposiciones de iniciativa legislativa popular), y también la iniciativa legislativa del Parlamento ante las Cortes Generales (propuestas de proposiciones de ley al Congreso de Diputados).

En este contexto, en el ámbito parlamentario y en relación con la normativa ambiental catalana, únicamente encontramos la proposición de ley de declaración del Parc Natural del Montseny, de parajes naturales de interés nacional y de reservas naturales integrales<sup>15</sup>.

Se trata de una iniciativa liderada por diversas entidades ecologistas, que han presentado al Parlamento de Catalunya una proposición de Ley de Declaración del Parc Natural del Montseny, de Parajes Naturales de Interés Nacional y de Reservas Integrales. Esta proposición, recoge aspectos jurídicos, organizativos,

---

<sup>15</sup> Se tramita como proposición de ley bajo el número de expediente 202-00065/12.

Fecha de obertura el 14.11.2019. Núm. registro 51353. Los proponentes son CP ILP Parc Natural Montseny.

geográficos y científicos que justifican la necesidad y establecen: las bases, la delimitación y los niveles de protección de este espacio natural.

## **6. EL ACUERDO GOV/24/2020, DE 18 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO DE BASE DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN CATALUÑA**

El Gobierno de la Generalitat el 18 de febrero de 2020, adoptó el acuerdo por el cual se aprueba el documento base del Acuerdo Nacional para la Agenda 2030<sup>16</sup>.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es una hoja de ruta de las Naciones Unidas para disponer de un marco consensuado de actuación ante los retos globales de la humanidad. Esta hoja de ruta establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de tipo económico, social y ambiental<sup>17</sup>. Para traducir los objetivos en acciones efectivas, Naciones Unidas anima a desarrollar respuestas nacionales ambiciosas para aplicar esta agenda y a crear alianzas de colaboración entre todos los países y actores para alcanzar los ODS.

Respondiendo a este mandato internacional, el 14 de febrero de 2017, el Gobierno adoptó el Acuerdo del Gobierno para la elaboración del Plan nacional para la implementación de la Agenda 2030 en Cataluña y de creación de la Comisión Interdepartamental para la elaboración del Plan en Cataluña.

Por otra parte, el Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó, en la sesión 19, del día 9 de noviembre de 2018, la Moción 20/XII, sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, por la que se insta al Gobierno de Cataluña, entre otros, a priorizar la Agenda 2030 en la elaboración de todas sus políticas y continuar con los trabajos de elaboración del Plan nacional para la implementación de la Agenda 2030 —que ya fue aprobado por Acuerdo del Gobierno, de 25 de septiembre de 2019—, a elaborar el documento de base de un acuerdo nacional para la Agenda 2030 en Cataluña y a impulsar una alianza de los actores públicos y privados que suscriban el acuerdo nacional.

---

<sup>16</sup> DOGC Núm. 8068, de 20 de febrero de 2020.

<sup>17</sup> Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015), Proyecto de resolución remitido a la Cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda para el Desarrollo de 2015 por la Asamblea General en su sexagésimo noveno periodo de sesiones, Nueva York.

Vista la necesidad de elaborar el documento de base de un acuerdo nacional para la Agenda 2030 y de dinamizar esta alianza de actores públicos y privados, el Gobierno adoptó el Acuerdo del Gobierno, de 24 de abril de 2019, que modificaba el Acuerdo del Gobierno, de 14 de febrero de 2017, con el fin de incluir entre las funciones que corresponden a la Comisión Interdepartamental estas nuevas tareas, así como incluir modificaciones en la composición tanto de la Comisión Interdepartamental como de la Comisión Técnica, que la integra.

En este sentido, la Generalidad de Cataluña puso en marcha, a través del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) y la Dirección General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, un proceso participativo con el fin de elaborar el documento de base del Acuerdo nacional para la Agenda 2030 encargado por el Parlamento de Cataluña en la Moción 20/XII, y así extender la acción en favor de los ODS más allá del Gobierno.

En la primera fase de este proceso participativo, se identificó un grupo de actores públicos y privados que han estado fuertemente implicados, y de forma pionera, en los ODS en Cataluña, y se los invitó a participar en una serie de sesiones deliberativas para recoger aportaciones para el diseño del Acuerdo nacional para la Agenda 2030.

Las aportaciones recogidas durante estas sesiones han permitido elaborar un documento de base para el Acuerdo nacional de la Agenda 2030 que fue validado, en fecha 7 de febrero de 2020, por la Comisión Interdepartamental de la Agenda 2030.

En una segunda fase del proceso participativo, que se iniciará el año 2020, el Acuerdo nacional se abrirá al conjunto de la sociedad civil para que se pueda adherir a esta y definir cómo puede contribuir a avanzar, desde Cataluña, en la consecución de los ODS, formando parte así de la Alianza Cataluña 2030.

## **7. OTRA ACTIVIDAD GOBERNATIVA DESTACABLE EN MATERIA AMBIENTAL. CATALUÑA APRUEBA EL PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA PARA EL PERÍODO 2020**

En el periodo estudiado, por parte del ejecutivo catalán, a propuesta de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático se ha aprobado el

Plan de Inspección Ambiental Integrada para el periodo 2020-2022, que se implementará mediante programas anuales de inspección<sup>18</sup>.

El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Recomendación 2001/331/CE, del 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales de los Estados miembros<sup>19</sup> y consideraron la conveniencia de que las autoridades públicas dispongan de uno o más programas de inspección que cubran todo el territorio de su competencia y todas las instalaciones controladas que se ubiquen. También se fijan los criterios generales sobre el alcance, el contenido mínimo y la base sobre la que desarrollarse. Asimismo, se establecen los criterios que deberían aplicar los organismos competentes de la inspección ambiental en materia de organización, ejecución, seguimiento y publicación de las inspecciones.

Finalmente se plantea la necesidad de tener en cuenta la división de responsabilidades entre los servicios de autorización y los servicios de inspección.

En Cataluña, la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades<sup>20</sup> regula el régimen de intervención administrativa de las actividades y establece que quedan sometidas a un seguimiento ambiental que, en función del anexo en que se clasifica la actividad, se ejecuta mediante un sistema de inspección o un régimen de controles ambientales.

Las actividades sujetas al régimen de intervención administrativa de autorización ambiental y que están incluidas en el anexo I.1 quedan sometidas a un sistema de inspección ambiental integrada que se instrumenta mediante el plan y los programas de inspección ambiental integrada, que aprueba la dirección general competente en materia de calidad ambiental.

El Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad<sup>21</sup>, establece que corresponden a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático la aprobación de los planes y

---

<sup>18</sup> Publicado en el DOGC Núm. 8066, de fecha 18 de febrero de 2020.

<sup>19</sup> Diario Oficial nº L 118 de 27/04/2001 p. 0041 – 0046.

<sup>20</sup> Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5524, de 11/12/2009.

<sup>21</sup> Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 4 de agosto de 2016.

programas de inspección de las actividades con incidencia ambiental en el ámbito de sus competencias.

El Plan de inspección ambiental integrada es un documento marco de carácter plurianual que ofrece las orientaciones estratégicas en materia de comprobación y verificación de las actividades que cubre con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en las autorizaciones ambientales.

El 10 de febrero de 2017 se aprueba el segundo Plan de inspección ambiental integrada de Cataluña, para el período 2017-2019. Finalizado este plan y de la experiencia alcanzada se redacta el nuevo Plan de inspección ambiental integrada de Cataluña, para el periodo 2020-2022, que se estructura en siete capítulos con el contenido que, en síntesis, se indica a continuación.

Una primera parte introductoria, que expone los antecedentes de la actividad inspectora y la normativa aplicable en materia de inspección ambiental, incluyendo el marco competencial.

El capítulo segundo identifica el objetivo general que se persigue, comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos fijados en las autorizaciones ambientales de los establecimientos, y los objetivos estratégicos planteados con el fin de proteger el medio ambiente de Cataluña y asegurar un desarrollo sostenible.

El capítulo tercero incluye las definiciones de los conceptos y los términos clave que contiene. El capítulo cuarto se refiere al alcance de aplicación del plan, los recursos disponibles y el criterio establecido para la distribución de las actuaciones de inspección entre las unidades del Departamento de Territorio y Sostenibilidad que tienen atribuidas la función de inspección ambiental integrada de las actividades cubiertas por el plan.

El capítulo quinto establece que el plan de inspección se instrumenta mediante programas anuales y se detalla cuál debe ser su contenido. El capítulo sexto contiene las acciones previstas para fomentar la calidad, la competencia y la mejora continua del plan, tales como la formación del personal inspector, el intercambio de experiencias y las actividades de coordinación.



En el último capítulo se especifican los indicadores establecidos para llevar a cabo la evaluación y seguimiento del plan y, en su caso, el proceso para la revisión del plan.

## **8. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: CATALUÑA APRUEBA LA ORDEN PARA LA NORMALIZACIÓN DE LAS CLAVES URBANÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO**

En el DOGC Núm. 7995 de 5 de noviembre de 2019 se publica la Orden para la normalización de las claves urbanísticas y requerimientos técnicos de presentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico<sup>22</sup>.

Tomando como base el artículo 149.5.c) del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye competencia exclusiva a la Generalidad para el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, y también de su procedimiento de tramitación y aprobación.

Según el preámbulo de esta Orden, el Mapa urbanístico de Cataluña (MUC) que, de forma continua, homogénea y sintética, permite la consulta de las principales determinaciones del planeamiento urbanístico general vigente en Cataluña, es uno de los elementos esenciales del sistema de información urbanística de Cataluña. Este instrumento orientado a la recogida, explotación, análisis y difusión de los mencionados datos urbanísticos requiere una actualización constante para incorporar las sucesivas modificaciones o revisiones del planeamiento.

A fin de que esta actualización se pueda llevar a cabo de una manera inmediata a partir de la aprobación definitiva de cada instrumento de planeamiento urbanístico general, es fundamental que la presentación de la documentación en formato digital a los órganos urbanísticos de la Generalidad de estos instrumentos, a efectos de aprobación definitiva, incluya el compendio de determinaciones urbanísticas que deben representarse en el mapa, siguiendo

---

<sup>22</sup> Entrada en vigor: El 5 de diciembre de 2019.

los requerimientos tecnológicos y los códigos homogéneos utilizados por este sistema de información integrado.

Esta medida puede contribuir a mejorar la transparencia y la simplificación del ordenamiento urbanístico, ya que el establecimiento de un lenguaje común de aplicación en todo el territorio puede facilitar de manera importante la comprensión y la aplicación de los planes.

El estándar de codificación sintética y de representación gráfica de la clasificación y la calificación del suelo a seguir por los instrumentos de planeamiento urbanístico se detalla en el anexo I de esta Orden y debe instaurarse a partir de la aprobación de un nuevo instrumento de planeamiento urbanístico general, de un nuevo plan parcial urbanístico o de un nuevo plan de mejora urbana.

Con respecto a los requerimientos técnicos de presentación de los instrumentos de planeamiento urbanístico en los órganos urbanísticos de la Generalidad a efectos de aprobación definitiva o a efectos de la entrega prevista en el artículo 88 de la Ley de urbanismo, se concretan en la inclusión de una carpeta digital, denominada Estándar del Mapa urbanístico de Cataluña, estructurada de acuerdo con el modelo normalizado del anexo II.

Estos requerimientos son exigibles en todos los instrumentos de planeamiento urbanístico general, en los planes parciales y en los planes de mejora urbana y en las modificaciones de estos que se presenten en los órganos urbanísticos de la Generalidad con posterioridad a la entrada en vigor de esta Orden. Mientras un instrumento de planeamiento urbanístico general no tenga las claves urbanísticas normalizadas, la carpeta del Estándar del Mapa urbanístico de Cataluña se debe completar con la correspondiente tabla de equivalencias.

## **9. OTRAS NORMAS Y ACTUACIONES DE INTERÉS EN MATERIA AMBIENTAL**

En materia de subvenciones, cabe subrayar la aprobación de las bases de numerosas convocatorias para el otorgamiento de subvenciones en ámbitos sectoriales diversos (son destacables las otorgables a administraciones públicas

en materia de iluminación exterior<sup>23</sup>, vegetación en urbanizaciones<sup>24</sup> y en materia de reciclaje de residuos<sup>25</sup> y las previstas para las comunidades de regantes<sup>26</sup> y agrupaciones de defensa forestal<sup>27</sup>.

También son importantes las subvenciones convocadas dirigidas al desarrollo rural<sup>28,29</sup>.

---

<sup>23</sup> DOGC del día 23/03/2020. RESOLUCIÓN TES/753/2020, de 12 de marzo, de convocatoria de subvenciones para actuaciones de ordenación ambiental de la iluminación exterior realizadas durante los años 2018 y 2019 o a realizar durante el año 2020 (ref. BDNS 500441).

<sup>24</sup> Se ha publicado en el DOGC del día 19/12/2019 la RESOLUCIÓN ARP/3506/2019, de 11 de diciembre, por la cual se convocan las ayudas para el tratamiento de la vegetación en urbanizaciones y núcleos de población afectados por la Ley 5/2003, de 22 de abril, correspondientes a 2020 (ref. BDNS 486885).

<sup>25</sup> RESOLUCIÓN TES/757/2020, de 19 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la implementación de mejoras en las instalaciones públicas de tratamiento mecánico y biológico de residuos municipales existentes, ubicados en el ámbito territorial de Cataluña. El objeto de estas bases es la implementación de mejoras en las instalaciones públicas existentes de tratamiento mecánico y biológico de la fracción resto y la fracción orgánica de los residuos municipales. También se ha publicado en el DOGC el día 12/17/2019 RESOLUCIÓN TES / 3484/2019, de 5 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para la asignación de cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a entes locales de Cataluña para la realización de proyectos piloto de compra pública de innovación en materia de recogida selectiva de residuos municipales (ref. BDNS 485.767).

<sup>26</sup> DOGC el día 28/04/2020. RESOLUCIÓN ARP/904/2020, de 21 de abril, por la que se convocan las ayudas a las comunidades de regantes afectadas por los aguaceros de octubre de 2019 y por el temporal Gloria de enero de 2020 (ref. BDNS 503741).

<sup>27</sup> DOGC el día 14/04/2020 RESOLUCIÓN ARP/828/2020, de 2 de abril, por la que se convocan las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa forestal (ADF) para el año 2020 (ref. BDNS 502271).

<sup>28</sup> DOGC del día 11/25/2019 ORDEN ARP/204/2019, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el marco del programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.

<sup>29</sup> DOGC del día 11/14/2019 RESOLUCIÓN TES/2920/2019, de 8 de noviembre, de convocatoria de subvenciones en los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014- 2020 para el año 2020 (ref. BDNS 481.382). También en el DOGC del día 10/15/2019 ORDEN TES/184/2019, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CATALUÑA  
(PRIMER SEMESTRE 2020)**

—

**DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CATALUNYA  
(PRIMER SEMESTRE 2020)**

MARÍA INÉS GIL CASIÓN

*Professora associada de Dret Administratiu*

*Universitat Rovira i Virgili*

**Sumari: 1. Introducció 2. La Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris 3. La Llei 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura 4. El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables 5. Iniciatives legislatives, projectes de llei, proposicions de llei i proposicions d'iniciativa legislativa popular, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya 6. L'Acord GOV/24/2020, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el document de base de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible a Catalunya 7. Una altra activitat governativa destacable des del punt de vista ambiental: Catalunya aprova el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada per al període 2020 8. Ordenació del territori: Catalunya aprova l'Ordre per a la normalització de les claus urbanístiques i requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic 9. Altres normes i actuacions d'interès des del punt de vista ambiental**

## **1. Introducció**

En el període examinat (del 31 d'octubre de 2019 al 30 d'abril de 2020), pel que fa a la funció legislativa, podem dir que s'ha reinstaurat una certa normalitat. Si en cròniques precedents parlàvem d'escassetat de producció normativa com a conseqüència de l'excepcionalitat política, aquest semestre, una vegada iniciada la XII legislatura, amb la presa de possessió del nou executiu i aixecada la suspensió de l'autonomia política de Catalunya, podem afirmar que la "sequera normativa" des del punt de vista ambiental s'ha pal·liat. Els que s'incorporen al cos legal de la matèria ambiental aquest primer semestre de 2020 són dues lleis ordinàries i un decret llei.

A més, als efectes que ens interessin, el semestre que és objecte d'aquesta crònica també arriba a l'acció de govern de l'executiu, el qual ha aprovat diverses disposicions amb rang reglamentari d'incidència directa des del punt de vista ambiental.

També cal tenir en compte que es continuen implementant diversos instruments de foment dirigits a administracions públiques i particulars per dur a terme actuacions lligades a la protecció del medi ambient i al desenvolupament sostenible.

Finalment cal destacar que la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, en la qual encara estem immersos aquests dies, ha provocat la suspensió de l'activitat parlamentària i l'alentiment en la tramitació d'instruments normatius a partir de mitjans del mes de març.

## **2. La Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris**

Al DOGC núm. 8084, de data de 13 de març de 2020, es publica la Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris<sup>30</sup>.

L'objectiu principal d'aquesta llei és prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris per evitar que la sobreproducció o els excedents d'aliments es converteixin en residus<sup>31</sup>.

En l'exposició de motius, es constata que el malbaratament alimentari és un problema que en els últims anys ha adquirit molta rellevància tant en l'àmbit polític com en el social. S'ha incrementat la consciència social sobre el fet que cal lluitar contra les pèrdues i el malbaratament d'aliments que es generen al

---

<sup>30</sup> Aprovada pel Ple del Parlament català el dia 4 de març per unanimitat.

<sup>31</sup> Generalitat de Catalunya i Agència de Residus de Catalunya. Un consum responsable dels aliments. (2016). 1a ed. [llibre digital]. Disponible a: <[http://www20.gencat.cat/docs/arc/home/lagencia/publicacions/centre%20cata%20del%20reciclatge%20\(CCR\)/guia\\_consum\\_responsable\\_ES.pdf](http://www20.gencat.cat/docs/arc/home/lagencia/publicacions/centre%20cata%20del%20reciclatge%20(CCR)/guia_consum_responsable_ES.pdf)> [Accés: 2 de maig de 2020]. L'Agència de Residus de Catalunya quantifica el malbaratament alimentari en la distribució minorista, la restauració i les llars, n'identifica les causes i planteja propostes d'actuació per reduir-lo. Les principals conclusions són que a Catalunya es malbaraten anualment més de 260.000 tones d'aliments, que corresponen al 7% del que adquireixen les famílies, els restaurants i els comerços i que equivalen a trenta-cinc quilos d'aliments per càpita. La major part del malbaratament (58%) té lloc a les llars, seguit dels supermercats (16%), l'hostaleria (12%), el comerç minorista (9%), els serveis d'àpats (4%) i els mercats municipals (1%). En l'àmbit domèstic, les principals causes que influeixen en el malbaratament alimentari són la falta de conscienciació del que es llença, la poca planificació de les compres, la falta de coneixement de les tècniques d'emmagatzematge, la confusió respecte de les dates de caducitat i de consum preferent, i els formats de les racions que poden adquirir-se als supermercats.

llarg de la cadena alimentària. Els models predominants de producció, transformació, distribució i consum d'aliments són incapaços de resoldre els problemes de seguretat i sobirania alimentàries de la població mundial.

La dieta de gairebé nou-cents milions de persones és insuficient i pobra, mentre que un terç del primer món presenta obesitat a causa d'una ingesta excessiva o inadequada. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), s'estima que un terç de tots els aliments produïts en l'àmbit mundial es perden o es malbaraten<sup>32</sup>.

Les pèrdues i el malbaratament alimentaris afebleixen l'economia, fan que les empreses siguin menys competitives, fan augmentar la despesa de la llar i obliguen l'Administració a destinar recursos per gestionar els residus alimentaris. A més, tenen com a efectes la reducció de les terres fèrtils disponibles, la pèrdua de la diversitat biològica, l'excés d'ús d'aigua potable i energia i l'increment de la generació de residus, i són una de les causes del canvi climàtic. Encara que, no obstant tot l'anterior, en determinades condicions, les parts comestibles dels aliments que queden a la mateixa explotació, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per fer compostatge in situ, poden contribuir a la generació de sistemes productius respectuosos amb la conservació de la biodiversitat i el medi.

Cada any a la Unió Europea es desaprofiten uns vuitanta-vuit milions de tones d'aliments, i es preveu que aquesta xifra augmentarà exponencialment si no s'adopten mesures preventives. Els costos del malbaratament són de tipus econòmic i mediambiental i afecten els consumidors, els agents de la cadena alimentària i les entitats d'iniciativa social. A més, el cost mediambiental repercuteix en el conjunt de la societat, principalment amb la creixent escassetat de recursos i els efectes en el canvi climàtic.

En l'àmbit europeu no hi ha una normativa harmonitzada pel que fa a aquesta qüestió: encara que hi ha hagut nombrosos intents per legislar-la, solament s'han

---

<sup>32</sup> Es pot veure a: <<http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/>> (darrera consulta: 2 de maig de 2020).

aconseguit establir algunes mesures en política agrícola comuna, com ara la supressió de les subvencions a l'exportació, que probablement ha ajudat a prevenir la sobreproducció, o el programa de consum de fruita i llet impulsat a les escoles per fomentar bons hàbits alimentaris entre els nens i joves, que pot anar acompanyat de mesures educatives que fomentin la prevenció del malbaratament alimentari. Ara bé, sí que hi ha un document que pot actuar com a marc orientador, la Resolució de 19 de gener de 2012 del Parlament Europeu<sup>33</sup> sobre com evitar el desaprofitament d'aliments: estratègies per millorar l'eficiència de la cadena alimentària a la Unió Europea, que indica que la lluita contra el malbaratament alimentari ha de convertir-se en una prioritat en l'àmbit europeu.

De fet, en el paquet d'economia circular, la nova Directiva 2018/851/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus<sup>34</sup>, obliga els estats membres a elaborar programes de prevenció de residus alimentaris i a aplicar mesures per reduir la generació de residus alimentaris, en el compromís de la Unió Europea i els països membres de complir l'objectiu de desenvolupament sostenible 12.3, de reduir a la meitat els residus d'aliments per càpita mundial en la venda al detall i en l'àmbit del consum, així com reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues després de la collita.

En l'exposició de motius es reconeix que aquesta llei no pot incloure mesures en l'àmbit de la política agrícola comuna, la política pesquera o la de seguretat alimentària, ja que queden fora de l'abast de les competències de la Generalitat. No obstant això, pretén conscienciar del problema del malbaratament alimentari i habilitar eines que en possibilitin la prevenció, amb l'aplicació de la jerarquia de prioritats que inspira la Directiva 2008/98/CE del Parlament europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus<sup>35</sup>, i promoure mesures

---

<sup>33</sup> P7\_TA(2012)0014 Com evitar el desaprofitament d'aliments. Resolució del Parlament europeu de 19 de gener de 2012, sobre com evitar el desaprofitament d'aliments: estratègies per millorar l'eficiència de la cadena alimentària a la UE (2011/2175(INI)).

<sup>34</sup> *Diari Oficial de la Unió Europea* de 14.6.2018 .L 150/109.

<sup>35</sup> *Diari Oficial de la Unió Europea* de 22.11.2008. L 312/3.



que incentivin la reducció del malbaratament com ara l'establiment d'acords entre empreses distribuïdores i entitats d'iniciativa social.

Les definicions de la Llei respecten els conceptes aplicables d'acord amb la Directiva 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà; la Directiva 2008/98/CE sobre els residus ja esmentada, modificada per la Directiva 2018/851, de 30 de maig; el Reglament 178/2002 del Parlament europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària; el Reglament 1169/2011 del Parlament europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor; la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el Reglament 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior.

També és voluntat de l'Administració treballar en el disseny d'indicadors d'avaluació; elaborar i difondre guies de bones pràctiques per reduir les pèrdues i el malbaratament d'aliments dels agents de la cadena alimentària; dur a terme campanyes d'informació dirigides a consumidors i restauració; promoure acords de compliment voluntari; promoure la col·laboració amb els bancs d'aliments i altres entitats d'iniciativa social; fomentar els canals curts de comercialització, i fomentar les auditories sectorials o d'empreses, i el disseny i creació de nous projectes que permetin millorar l'eficiència en l'aprofitament d'aliments.

Quant a l'estructura de la Llei, consta de quinze articles, organitzats en quatre capítols. El capítol I, "Disposicions generals", incorpora l'objecte de la Llei, l'àmbit d'aplicació i les definicions dels conceptes.

El capítol II, "Obligacions dels agents de la cadena alimentària", estableix les obligacions de les empreses de la cadena alimentària, de les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre, de les empreses del sector de la restauració i l'hostaleria i de la mateixa Administració pública i el sector públic.

Entre aquestes obligacions hi ha la de disposar d'un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris i aplicar-lo en els termes que estableixi el reglament; reduir i mesurar anualment la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, i informar-ne, i evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per al consum o valorització.

També estableix les obligacions de les empreses del sector de la restauració i l'hostaleria, de manera destacada la promoció del consum de productes de temporada i de proximitat; facilitar al consumidor que pugui emportar-se, sense cost addicional, els aliments que no hagi consumit i utilitzar envasos, per traslladar aliments no consumits, que siguin aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables.

Entre les obligacions de l'Administració pública el text assenyala incorporar, en els contractes públics i els convenis de gestió de serveis relacionats amb la gestió d'aliments, clàusules per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, així com facilitar la creació d'espais i de sistemes per a la distribució dels excedents alimentaris.

A les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d'aliments se'ls imposen, entre altres, l'obligació de mantenir pràctiques d'higiene correctes en la conservació i la manipulació dels aliments i de disposar dels elements i les infraestructures necessaris per conservar, manipular i distribuir els aliments en condicions òptimes, especialment els productes frescos.

La norma també fa referència a la jerarquia de prioritats a les quals han d'adaptar les seves actuacions els diferents agents de la cadena alimentària: prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris; utilització per a l'alimentació humana; utilització per a l'alimentació animal; valorització del material mitjançant la recuperació d'elements i substàncies contingudes en els residus alimentaris per a usos industrials; valorització material mitjançant l'obtenció de compost de

qualitat; valorització energètica mitjançant l'obtenció de biogàs; altres tipus de valorització energètica, i eliminació.

El capítol III, "Prevenió de les pèrdues i el malbaratament alimentaris", estableix mesures de suport i foment del Govern per prevenir el malbaratament alimentari.

En aquest àmbit la norma imposa al Govern, amb la col·laboració del Consell Català de l'Alimentació, l'elaboració del Pla Estratègic de Prevenió de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentaris, que ha d'actualitzar-se amb una periodicitat màxima de cinc anys, i ha d'assenyalar les dades que el mateix la ha de contenir.

A més, especifica les accions que han de dur a terme l'Administració pública i les empreses alimentàries per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris, com ara campanyes informatives i de sensibilització per conscienciar de la necessitat d'afavorir un consum responsable; fomentar que les dates de consum preferent es fixin de manera responsable, i incentivar l'aprofitament d'aliments amb la data de consum preferent superada.

Per part seva, l'Administració ha de treballar en el disseny d'indicadors d'avaluació; elaborar i difondre guies de bones pràctiques per reduir les pèrdues i el malbaratament d'aliments dels agents de la cadena alimentària; dissenyar campanyes d'informació dirigides a consumidors i restauració; promoure acords de compliment voluntari; promoure la col·laboració amb els bancs d'aliments i altres entitats d'iniciativa social; fomentar els canals curts de comercialització, i potenciar les auditories sectorials o d'empreses i el disseny i la creació de nous projectes que permetin millorar l'eficiència en l'aprofitament d'aliments.

Finalment, el capítol IV regula el règim sancionador aplicable a la matèria ordenada. La Llei es completa amb dues disposicions addicionals i set disposicions finals<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Entre les quals destaca la modificació de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum.

En conclusió, amb aquesta norma, Catalunya estableix les prioritats a les quals han d'adaptar les seves actuacions els diferents agents de la cadena alimentària: des de la prevenció de les pèrdues i el malbaratament i la utilització per a l'alimentació humana fins a la valorització energètica mitjançant l'obtenció de biogàs. Obliga les empreses de restauració a promoure el consum de productes de temporada i de proximitat i a facilitar al consumidor que pugui emportar-se els aliments que no hagi consumit i fomenta els bancs d'aliments. Amb això es pretén prevenir de manera efectiva les pèrdues i el malbaratament alimentaris, i amb això evitar la generació de residus i contribuir al consum responsable.

### **3. La Llei 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura**

Al DOGC núm. 8080 de data 9 de març de 2020 es publica la nova Llei catalana reguladora del sector de la vitivinicultura<sup>37</sup>.

Com s'indica en l'exposició de motius de la norma, el sector de la vinya i el vi té una importància cabdal a Catalunya, tant en la producció de raïm com en l'elaboració de vi, i és un dels motors de l'economia catalana. Històricament, Catalunya ha estat des de fa segles un país amb tradició de cultiu de la vinya i d'elaboració de vi.

Per observar la importància del sector vitivinícola en l'economia catalana, l'exposició de motius indica que el 2018 a Catalunya es van collir 435 milions de quilograms de raïm, incloent tant la que va destinada a les denominacions

---

<sup>37</sup> Entrada en vigor: 9 de maig de 2020. Modifica la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, i el Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desplega la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, excepte els articles que van del 3 al 14, del 23 al 27, del 34 al 56 i del 67 al 73.

d'origen protegides com el vi sense denominació o el que va a destil·lació. Més del 60% d'aquest raïm es destina a la producció de cava. Quant als vins amb denominació d'origen, es pot observar que el 25% de la producció total estatal correspon a vins d'algunes de les denominacions d'origen protegides al territori català.

El 2017 el sector representa el 4,04% del valor de la producció final agrària (PFA) de Catalunya, i la indústria vinícola, el 5,30% de la indústria agroalimentària. D'altra banda, el 2018 el pes de les exportacions dels productes vínics suposa 624 milions d'euros, xifra que representa un augment del 2,7% en relació amb l'any anterior. Els objectius d'aquesta llei són diversos. En primer lloc, ha d'adaptar-se la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola<sup>38</sup>, a la normativa europea resultant de l'organització comuna del mercat del vi i, en particular, al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea l'organització comuna de mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007, i el Reglament (UE) 2019/625 de la Comissió, de 4 de març, que completa el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament europeu i del Consell, de 15 de març, relatiu als controls i altres activitats oficials duts a terme per garantir l'aplicació de la legislació en aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

Quant a l'estructura de la Llei, es compon d'un títol preliminar, vuit títols, onze disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals. El títol preliminar, a més d'establir l'objecte de la llei i els principis d'actuació, exposa de manera completa tota una sèrie de definicions necessàries per comprendre la llei.

El títol I es dedica en concret a implantar les grans línies d'actuació en aquesta matèria, com les autoritzacions de plantacions. A més, regula les plantacions no autoritzades i l'obligació d'arrenca-les, si escau. També instaura la regulació de les varietats amb l'establiment d'un catàleg i dona rang legal al Registre

---

<sup>38</sup> DOGC núm. 3673, de 09/07/2002 i BOE núm. 177, de 25/07/2002.

vitivinícola de Catalunya com a eina principal, juntament amb la targeta vitícola, del control en aquesta matèria.

El títol II estableix els objectius de les polítiques en aquesta matèria, que han de tendir a millorar la competitivitat dels vins catalans com a motor de les exportacions i han de fomentar-ne la diversitat i la qualitat. Descriu el foment de les activitats complementàries de la viticultura, com l'enoturisme i les rutes vinícoles, com a complement del turisme. De la mateixa manera, regula la pràctica enològica d'autorització de l'augment artificial del grau alcohòlic si es donen circumstàncies excepcionals.

El títol III sistematitza el sistema de protecció de l'origen dels vins de qualitat, tant de les denominacions d'origen protegides com de les indicacions geogràfiques protegides, i n'adapta la regulació a la normativa europea, que dona prioritat als plecs de condicions com a pilar central d'aquests distintius de qualitat.

Introdueix una modificació important respecte als vins de finca, en el sentit que els cellers no han d'estar necessàriament en la mateixa finca productora, la qual cosa potenciarà aquests vins de gran qualitat, però sí que han d'estar a la zona de la denominació d'origen protegida.

Sobre els vins sense denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, els vins varietals elaborats, envasats, emmagatzemats o comercialitzats en cellers situats a Catalunya, així com els vins de finca i els vins amb terme tradicional.

Així mateix, el títol III regula els òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides introduint algunes modificacions en el règim regulador, com són la possibilitat, elevada a rang de llei, de constituir consorcis que assumeixin les funcions de certificació i control o les normes que han de complir per acreditar-se com a entitats de certificació i control.

El títol IV regula els productes sense denominació d'origen protegida ni indicació geogràfica protegida, així com els que s'acullen a la nova possibilitat de les mencions de collita o varietat.

El títol V determina l'Institut Català de la Vinya i el Vi com a autoritat competent per verificar el compliment del plec de condicions de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides, així com el departament competent en matèria d'agricultura i qualitat agroalimentària com a autoritat competent en inspecció i control vitícola i vinícola. Per tant, l'autoritat competent per al control oficial, per a qualsevol dels àmbits inclosos en aquest concepte, s'atorga a l'Administració.

També estableix les obligacions de les entitats de certificació i control i dels operadors, i en regula la funció inspectora, que s'atribueix a la direcció general competent en matèria d'agricultura i a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, en funció de si es tracta de viticultura o de vinicultura. S'aclareixen les competències en aquesta matèria i se centralitza aquesta funció inspectora en aquests òrgans, d'acord amb el principi d'eficiència.

Finalment, també en aquest títol V es reglamenten les mesures cautelars unificant-ne el règim amb el que s'estableix la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

El títol VI, del règim sancionador, estableix el quadre d'infraccions i sancions i incorpora les tipificades en matèria de viticultura, que s'inclouïa la normativa anterior.

El títol VII conté les competències de l'Institut Català de la Vinya i el Vi en la promoció dels productes vínics, en la difusió, la promoció i el foment del consum moderat i responsable de productes vínics, en la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica i en l'experimentació, la difusió i l'anàlisi de la

producció vitícola i vinícola, a més de les funcions de tutela de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides.

El títol VIII fixa els aspectes que s'han de tenir en compte en el foment de la cultura del vi i en la transferència tecnològica. Estipula els aspectes concrets de les campanyes de promoció, difusió i informació relatives al sector de la vinya i el vi, i de les accions de formació de viticultors i vinicultors.

Per acabar, les disposicions addicionals contenen regles amb l'objectiu d'incrementar l'efectivitat dels controls dels productes vínics, i altres de relatius a les mencions dels vins ecològics, de producció integrada o biodinàmica.

La norma, a més de derogar la Llei 15/2002, deroga parcialment el Decret 474/2004, de 26 de desembre, pel qual es desplega la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, mantenint la vigència dels articles que no resulten afectats i dels que es refereixen al règim electoral dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides.

#### **4. El Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables**

Al DOGC núm. 8012, de 28 de novembre de 2019, es publica el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Entra en vigor el 29 de novembre de 2019, l'endemà d'haver estat publicada al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. Les sol·licituds d'autorització de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaïques que ja s'hagin presentat a tràmit en el moment de l'entrada en vigor de la nova disposició s'han de regir per la normativa anterior. I els parcs eòlics ja autoritzats i en funcionament que se situen totalment o parcialment en espais de la Xarxa Natura 2000 poden ser objecte de modificacions que suposin la minoració del seu impacte ambiental. Aquestes modificacions es regeixen per les previsions de l'apartat 4 de l'article 23 de la nova norma. La modificació només es pot dur a terme si la Ponència d'energies renovables hi dona conformitat. Normes afectades: el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.



Amb aquesta norma es pretén fer front a la situació d'emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius fixats en la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic<sup>40</sup>. Modifica així mateix, entre altres, la Llei d'urbanisme, per facilitar la implantació de les instal·lacions d'aprofitament d'energia solar i energia eòlica i estableix els requisits per a l'autorització d'instal·lacions de producció d'energia eòlica i d'energia solar fotovoltaica.

Tal com s'indica en l'exposició de motius de la norma, l'acció dels poders públics per fer front al canvi climàtic s'ha de dur a terme afrontant matèries i àmbits com l'energia, l'habitatge, l'urbanisme, la mobilitat o els sectors industrials, els quals es veuran afectats d'una manera o una altra.

A Catalunya, segons dades del 2017, el conjunt del cicle energètic (producció, transformació, transport, distribució i consum d'energia) representa el 72% de les emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle i el 87% de les emissions de diòxid de carboni. Aquestes dades mostren que, per abordar la lluita contra les causes del canvi climàtic, són clau les polítiques energètiques de generació i distribució, i els models de consum.

L'activitat legislativa i reglamentària posterior a la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, s'ha orientat a posar en marxa instruments ja previstos en aquesta llei i a regular noves eines jurídiques per donar resposta a l'emergència climàtica.

Segons estableix el preàmbul d'aquest decret llei, els instruments ordinaris que ofereix la legislació pel que fa a medi ambient, energia, i també urbanisme, són insuficients per resoldre la situació extrema a la qual s'ha arribat. Aquests instruments han de reforçar-se, redefinir-se o ampliar-se de manera urgent amb la finalitat d'encarar l'emergència climàtica amb diversos elements que permetin, en conjunt, incrementar de manera efectiva la producció d'energia mitjançant

---

<sup>40</sup> DOGC de 3 d'agost del 2017. Un estudi sobre la norma es pot veure a: DE LA VARGA PASTOR, AITANA. "Estudi de la Llei catalana 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic, i anàlisi comparativa amb altres iniciatives legislatives subestatal". *Revista Catalana de Dret Ambiental* 9.2 (2018).

energies renovables i altres mesures que permetin reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

La urgència de les mesures a les quals fa referència aquest decret llei resulta de l'anàlisi del context en el qual actua, fonamentalment en la necessitat d'incrementar la generació d'energies d'origen renovable i la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle.

El Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE), aprovat per l'Acord del Govern el 31 de gener de 2017 i que compta plenament amb el suport polític i de la societat civil pel procés participatiu dut a terme durant la seva elaboració, constitueix el nou marc de desplegament de la política energètica catalana per fer front als reptes de l'emergència climàtica en els propers anys.

Així, el PNTE presenta un escenari nou que va més enllà de l'objectiu de reduir el consum de combustibles fòssils i la contribució de l'energia nuclear, i planteja un nou escenari de tancament i abandó d'aquestes fonts energètiques, recollint l'objectiu específic d'aconseguir un sistema energètic amb energies cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en l'horitzó 2050, tal com estableixen els articles 2 i 19 de l'esmentada Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

El PNTE planteja un nou model energètic més democràtic, participatiu i de generació renovable distribuïda en què la ciutadania i les persones consumidores han de situar-se en el centre. Així, en el nou model energètic proposat, la ciutadania i les empreses passen a ser consumidores actives amb la possibilitat de poder consumir, generar, emmagatzemar i vendre energia elèctrica al mateix temps que en gestionen el consum.

El nou model ha de permetre l'agrupació i participació d'aquests productors i consumidors en comunitats locals d'energia o com agregadores d'energia. En el mateix sentit ha de fomentar-se la participació de la ciutadania, les empreses i les administracions locals en els projectes energètics que s'implantin al territori.

Respecte a l'energia solar, vista la seva modularitat, la seva maduració tecnològica i la caiguda molt significativa dels costos, ha de tenir la consideració d'eina principal en el compliment dels objectius del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de les persones consumidores, ja que els permet ser, alhora, generadores d'energia i participar en el mercat energètic.

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, recull els criteris del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. En concret, estableix com a objectius reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) en un 40% el 2030, en un 65% el 2040 i en un 100% el 2050 i, entre les finalitats específiques, inclou a l'article 2.2 contribuir a la transició cap a una societat en la qual el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, amb un sistema energètic descentralitzat i amb energies cent per cent renovables, fonamentalment de proximitat, amb l'objectiu d'aconseguir un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils ni nuclears el 2050. Els objectius numèrics indicats van ser declarats inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 87/2019, de 20 de juny<sup>41</sup>.

L'informe del Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC, octubre 2018), sobre la importància de no depassar el límit dels 1,5°C d'increment de la temperatura mitjana anual del planeta respecte de l'època preindustrial, constitueix una nova alerta de la comunitat científica sobre la urgència d'actuar de manera decidida enfront del canvi climàtic, i estableix la necessitat de reduir les emissions globals entorn del 45% el 2030 respecte dels nivells de 2010 i aconseguir unes emissions netes nul·les el 2050. Igualment, l'últim informe publicat de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES-2019) alerta també de la situació de declivi sense precedents en què es troba la naturalesa del planeta i l'acceleració de la ràtio d'extinció d'espècies.

La Generalitat de Catalunya, davant la nova alerta donada per la comunitat científica i veient amb preocupació els impactes que el canvi climàtic té i tindrà a

---

<sup>41</sup> BOE núm. 177, de 25 de juliol de 2019. ECLI:ES:TC:2019:87.

Catalunya i a tot el planeta, va entendre que calia prendre més consciència del risc que representa. De fet, a part dels efectes evidents en els ecosistemes, els efectes previsibles del canvi climàtic poden perjudicar notòriament la nostra economia productiva, des de l'afectació negativa en el funcionament i el manteniment de moltes infraestructures fins a importants alteracions dels entorns on tenen lloc activitats amb demandes intensives d'aigua o d'energia. L'afectació en la salut humana és un altre element d'especial preocupació, ja que l'excessiu consum de combustibles fòssils, especialment pel transport en els àmbits urbans, a més d'agreujar l'efecte d'hivernacle per les emissions de CO<sub>2</sub>, també contribueix a incrementar els nivells de NO<sub>x</sub> i PM<sub>10</sub> a l'atmosfera.

En definitiva, la situació descrita planteja una sèrie de reptes d'enorme complexitat que el Govern de Catalunya va afrontar el 14 de maig de 2019 declarant formalment l'emergència climàtica, unint-se a les institucions polítiques de tot el món que ja l'havien declarat i impulsant la consecució dels objectius en matèria de mitigació establerts en la Llei 16/2017, del canvi climàtic<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Amb aquesta finalitat, el Govern va assumir els compromisos següents:

Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per eliminar els obstacles que puguin posar en perill la consecució dels objectius pel que fa a la mitigació del canvi climàtic i transició energètica.

Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la necessària transició cap a un model energètic cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, com fixa la Llei 16/2017, del canvi climàtic.

Prioritzar, en les polítiques públiques, les opcions amb menys impacte climàtic i més contribució a l'adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.

Adoptar les mesures necessàries per aturar la preocupant pèrdua de biodiversitat i promoure la recuperació dels ecosistemes. Identificar i acompanyar els sectors de l'economia que han de fer la transició, sigui per adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, sigui per transformar-se en activitats de baixes emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), en un marc general d'aposta per l'economia circular i de creació de llocs de treball verds.

Assumir un model de mobilitat urbana basat, d'una banda, en el transport públic, en el vehicle compartit i en les maneres de micromobilitat i, de l'altra, en vehicles d'emissió zero. Declarar instal·lacions d'interès territorial estratègic les instal·lacions fotovoltaïques que utilitzin sistemes de captació d'energia fotovoltaïca avançats i eficients.

Elaborar, conjuntament entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Empresa i Coneixement, una estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energia renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaïca, necessàries per fer efectiva la transició energètica a Catalunya i

En aquest marc global normatiu de la Generalitat de Catalunya i amb la voluntat d'accelerar el desplegament dels instruments de la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, s'elabora aquest decret llei de mesures urgents amb la finalitat de fer front a l'emergència climàtica.

Quant a l'estructura del Decret llei, es compon de vint-i-tres articles ordenats en quatre capítols.

El capítol 1 conté les disposicions generals i objectius de la norma quant a l'adopció de mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica, que, en conseqüència, modifiquen la normativa per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica.

El capítol 2 recull, de manera essencial, la modificació i precisió de diferents punts recollits en la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en aspectes com els objectius d'utilització de les energies renovables a Catalunya, la irrupció de la mobilitat elèctrica en el sector del transport, l'aprofitament del potencial d'energies renovables en els ports, o la limitació de l'obtenció de gas o petroli mitjançant la fracturació hidràulica (*fracking*).

El capítol 3 regula les mesures que, en relació amb l'objecte del decret llei, requereixen la modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Consta d'un article, el 5, que es divideix en deu apartats. Són mesures l'essència de les quals se situa en els nous articles que s'afegeixen a la Llei d'urbanisme, el 9 bis i el 48 bis. La resta de modificacions de la Llei d'urbanisme són subsidiàries d'aquests nous articles per facilitar-ne la interpretació sistemàtica.

---

complir els objectius de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria d'energia. Instar el Parlament a convocar cada any un ple monogràfic sobre el canvi climàtic i la seva afectació a Catalunya i sobre les mesures de mitigació i adaptació que el Govern adopti, especialment les associades a la transició energètica.

El nou article 9 bis regula dos supòsits en matèria dels usos del sòl i de les construccions que són d'aplicació directa, és a dir, que no requereixen l'adaptació del planejament urbanístic vigent perquè siguin aplicables en els termes legalment establerts. L'apartat 1 d'aquest article conté una mesura per facilitar la implantació d'instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar a les cobertes de les construccions i els espais de les parcel·les urbanes no ocupats per les construccions en determinades condicions, sense que les determinacions urbanístiques dels plans, vigents o futures, siguin un obstacle.

L'apartat 2 del mateix article recull, en essència, un supòsit regulat en part en els apartats 3 i 4 de l'article 97 de la Llei d'urbanisme, pel que fa als serveis comuns dels edificis, que es deroguen. En coherència amb l'objecte del Decret Llei, aquest supòsit s'amplia amb un altre de regulat en la legislació en matèria de sòl, relatiu a les instal·lacions que tenen per objecte reduir la demanda energètica dels edificis.

Amb una diferència substancial respecte del precedent regulat en l'article 97 de la Llei d'urbanisme, en aquests casos tampoc és exigible l'adequació del planejament urbanístic vigent perquè les instal·lacions a les quals fa referència es puguin implantar d'acord amb el projecte autoritzat. En aquest sentit, són normes aplicables directament mentre siguin compatibles amb les normes que protegeixin el patrimoni cultural i la resta de béns protegits pel planejament urbanístic de conformitat amb l'article 71 i concordants de l'esmentada Llei d'urbanisme.

El nou article 48 bis, per remissió al nou apartat 5 bis de l'article 34, habilita els projectes d'actuació específica en sòl no urbanitzable per implantar directament infraestructures relatives als serveis tècnics als quals fa referència, que formen part del sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, quan el planejament territorial i urbanístic no les preveu o, encara que les preveu, no les regula detalladament. Supòsits en els quals no és exigible per a la formulació i autorització del projecte la modificació del planejament urbanístic, ni aprovar un

pla especial urbanístic autònom o de desenvolupament, tant si es tracta d'una infraestructura d'interès general com d'interès local.

Convé advertir que, encara que la finalitat primera del nou article és facilitar la implantació de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables i de les xarxes de transport i de distribució d'aquesta energia, s'ha optat per estendre aquesta mesura a altres infraestructures de serveis tècnics la necessitat dels quals no sempre és fàcil de preveure des del planejament urbanístic amb l'antelació suficient.

Es tracta, en definitiva, d'infraestructures en supòsits en què la seva implantació és necessària en sòl no urbanitzable, admissibles sempre que les lleis no impedeixin l'actuació o no estigui prohibida expressament pel planejament territorial i urbanístic en raó dels terrenys afectats i, en conseqüència, convé considerar que el projecte d'actuació específica és l'instrument jurídic idoni i suficient per autoritzar-ne la implantació en els casos esmentats, després de valorar les diferents alternatives possibles quan sigui exigible l'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la legislació en la matèria.

Finalment, el capítol 4 fa referència a la simplificació de la regulació de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica provinent d'energia eòlica o solar fotovoltaica i vol donar resposta a la paràlisi de facto que ha experimentat la implantació de l'energia eòlica a Catalunya, estancada en una potència instal·lada de 1270MW quan, arran dels treballs de prospectiva energètica, caldria multiplicar per deu aquesta xifra per aconseguir un model energètic cent per cent renovable en l'horitzó de 2050.

La disposició addicional primera conté una modificació del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre<sup>43</sup>, dirigida a facultar l'Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya per poder intervenir de manera immediata en la part catalana de les conques compartides per prevenir o reparar danys al domini públic hidràulic

---

<sup>43</sup> Publicat al DOGC núm. 4015, de 21 de novembre de 2003.

en cas que hi hagi episodis extrems com ara pluges torrencials, inundacions o desbordaments, per contribuir a garantir la seguretat de les persones i els béns. Així, pot executar directament o col·laborar amb altres administracions en actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic que es deriven d'aquesta mena d'episodis excepcionals, el caràcter extrem dels quals i severitat s'aprecia com una manifestació o conseqüència del canvi climàtic.

### **5. Iniciatives legislatives, projectes de llei, proposicions de llei i proposicions d'iniciativa legislativa popular, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya**

A més de la norma ressenyada anteriorment, el Parlament també ha tramitat un conjunt d'iniciatives ambientals que podrien arribar a concloure en llei del Parlament, sigui amb textos presentats pel Govern (projectes de llei), pels grups parlamentaris i membres del Parlament (proposicions de llei) o pels ciutadans (proposicions d'iniciativa legislativa popular), i també la iniciativa legislativa del Parlament a les Corts Generals (proposicions de llei al Congrés de Diputats).

En aquest context, en l'àmbit parlamentari i amb relació a la normativa ambiental catalana, únicament trobem la Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals<sup>44</sup>.

Es tracta d'una iniciativa liderada per diverses entitats ecologistes, que han presentat al Parlament de Catalunya una Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d'interès nacional i de reserves naturals integrals. Aquesta proposició recull aspectes jurídics, organitzatius, geogràfics i científics que justifiquen la necessitat i estableixen les bases, la delimitació i els nivells de protecció d'aquest espai natural.

---

<sup>44</sup> Es tramita com a proposició de llei amb el número d'expedient 202-00065/12

Data d'obertura. 14.11.2019. Núm. de registre: 51353. Els proponents són CP ILP Parc Natural Montseny.



## **6. L'Acord GOV/24/2020, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el document de base de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible a Catalunya**

El Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 va adoptar l'acord pel qual s'aprova el document base de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030<sup>45</sup>.

L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un full de ruta de les Nacions Unides per disposar d'un marc consensuat d'actuació davant els reptes globals de la humanitat. Aquest full de ruta estableix 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes de tipus econòmic, social i ambiental<sup>46</sup>. Per traduir els objectius en accions efectives, Nacions Unides anima a desplegar respostes nacionals ambicioses per aplicar aquesta agenda i a crear aliances de col·laboració entre tots els països i actors per assolir els ODS.

Responent a aquest mandat internacional, el 14 de febrer de 2017, el Govern va adoptar l'Acord del Govern per a l'elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental per a l'elaboració del Pla a Catalunya.

D'altra banda, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, en la sessió 19, del dia 9 de novembre de 2018, la Moció 20/XII, sobre l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, per la qual s'insta el Govern de Catalunya, entre altres, a prioritzar l'Agenda 2030 en l'elaboració de totes les seves polítiques i continuar amb els treballs d'elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 —que ja va ser aprovat per l'Acord del Govern de 25 de setembre de 2019—, a elaborar el document de base d'un acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya i a impulsar una aliança dels actors públics i privats que subscriuguin l'acord nacional.

---

<sup>45</sup> DOGC núm. 8068, de 20 de febrer de 2020.

<sup>46</sup> Organització de les Nacions Unides (ONU) (2015), Projecte de resolució remès a la Cimera de les Nacions Unides per a l'aprovació de l'Agenda per al Desenvolupament de 2015 per l'Assemblea General en el seixanta-novè període de sessions, Nova York.

Vista la necessitat d'elaborar el document de base d'un acord nacional per a l'Agenda 2030 i de dinamitzar aquesta aliança d'actors públics i privats, el Govern va adoptar l'Acord del Govern, de 24 d'abril de 2019, que modificava l'Acord del Govern, de 14 de febrer de 2017, amb la finalitat d'incloure entre les funcions que corresponen a la Comissió Interdepartamental aquestes tasques noves, així com incloure modificacions en la composició tant de la Comissió Interdepartamental com de la Comissió Tècnica, que la integra.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa, a través del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, un procés participatiu amb la finalitat d'elaborar el document de base de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 encarregat pel Parlament de Catalunya en la Moció 20/XII, i així estendre l'acció en favor dels ODS més enllà del Govern.

En la primera fase d'aquest procés participatiu es va identificar un grup d'actors públics i privats que han estat fortament implicats, i de manera pionera, en els ODS a Catalunya, i se'ls va convidar a participar en una sèrie de sessions deliberatives per recollir aportacions per al disseny de l'Acord nacional per a l'Agenda 2030.

Les aportacions recollides durant aquestes sessions han permès elaborar un document de base per a l'Acord nacional de l'Agenda 2030 que va ser validat, en data 7 de febrer de 2020, per la Comissió Interdepartamental de l'Agenda 2030.

En una segona fase del procés participatiu, que s'iniciarà el 2020, l'Acord nacional s'obrirà al conjunt de la societat civil perquè s'hi pugui adherir i definir com pot contribuir a avançar, des de Catalunya, en la consecució dels ODS, formant part així de l'Aliança Catalunya 2030.

## **7. Una altra activitat governativa destacable des del punt de vista ambiental. Catalunya aprova el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada per al període 2020**

En el període estudiat, l'executiu català, a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha aprovat el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada per al període 2020-2022, que s'implementarà mitjançant programes anuals d'inspecció<sup>47</sup>.

El Parlament i el Consell de la Unió Europea van aprovar la Recomanació 2001/331/CE, de 4 d'abril de 2001, sobre criteris mínims de les inspeccions mediambientals dels estats membres<sup>48</sup> i van considerar la conveniència que les autoritats públiques disposin d'un o més programes d'inspecció que cobreixin tot el territori de la seva competència i totes les instal·lacions controlades que s'hi ubiquin. També es fixen els criteris generals sobre l'abast, el contingut mínim i la base sobre la qual es defineixen. Així mateix s'estableixen els criteris que haurien d'aplicar els organismes competents de la inspecció ambiental pel que fa a organització, execució, seguiment i publicació de les inspeccions.

Finalment es planteja la necessitat de tenir en compte la divisió de responsabilitats entre els serveis d'autorització i els serveis d'inspecció.

A Catalunya, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats<sup>49</sup> regula el règim d'intervenció administrativa de les activitats i estableix que queden sotmeses a un seguiment ambiental que, en funció de l'annex en què es classifica l'activitat, s'executa mitjançant un sistema d'inspecció o un règim de controls ambientals.

Les activitats subjectes al règim d'intervenció administrativa d'autorització ambiental i que s'inclouen en l'annex I.1 se sotmeten a un sistema d'inspecció

---

<sup>47</sup> Publicat al DOGC núm. 8066, de data 18 de febrer de 2020.

<sup>48</sup> *Diari Oficial* núm. L 118 de 27 d'abril de 2001, p. 0041 – 0046.

<sup>49</sup> *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* núm. 5524, d'11 de desembre de 2009.

ambiental integrada que s'instrumenta mitjançant el pla i els programes d'inspecció ambiental integrada, que aprova la direcció general competent en qualitat ambiental.

El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat<sup>50</sup>, estableix que corresponen a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic aprovar els plans i programes d'inspecció de les activitats amb incidència ambiental en l'àmbit de les seves competències.

El Pla d'Inspecció Ambiental Integrada és un document marc de caràcter pluriennal que ofereix les orientacions estratègiques pel que fa a la comprovació i verificació de les activitats que cobreix amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establertes en les autoritzacions ambientals.

El 10 de febrer de 2017 s'aprova el segon Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2017-2019. Finalitzat aquest pla i de l'experiència aconseguida es redacta el nou Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2020-2022, que s'estructura en set capítols, amb el contingut que, en síntesi, s'indica a continuació.

Una primera part introductòria, que exposa els antecedents de l'activitat inspectora i la normativa aplicable en inspecció ambiental, incloent el marc competencial.

El capítol segon identifica l'objectiu general que es persegueix, comprovar el grau de compliment dels requisits establerts en les autoritzacions ambientals dels establiments, i els objectius estratègics plantejats amb la finalitat de protegir el medi ambient de Catalunya i assegurar el desenvolupament sostenible.

El capítol tercer inclou les definicions dels conceptes i els termes clau que conté. El capítol quart es refereix a l'abast d'aplicació del pla, els recursos disponibles i

---

<sup>50</sup> *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, de 4 d'agost de 2016.

el criteri establert per a la distribució de les actuacions d'inspecció entre les unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat que tenen atribuïdes la funció d'inspecció ambiental integrada de les activitats cobertes pel pla.

El capítol cinquè estableix que el pla d'inspecció s'instrumenta mitjançant programes anuals i es detalla quin n'ha de ser el contingut. El capítol sisè conté les accions previstes per fomentar la qualitat, la competència i la millora contínua del pla, com ara la formació del personal inspector, l'intercanvi d'experiències i les activitats de coordinació.

En l'últim capítol s'especifiquen els indicadors establerts per dur a terme l'avaluació i seguiment del pla i, si escau, el procés per a la revisió del pla.

## **8. Ordenació del territori: Catalunya aprova l'Ordre per a la normalització de les claus urbanístiques i requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic**

Al DOGC núm. 7995, de 5 de novembre de 2019, es publica l'Ordre per a la normalització de les claus urbanístiques i requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic<sup>51</sup>.

Prenent com a base l'article 149.5.c de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, atribueix competència exclusiva a la Generalitat per a l'establiment i la regulació dels instruments de planejament i gestió urbanística, i també del seu procediment de tramitació i aprovació.

Segons el preàmbul d'aquesta ordre, el Mapa urbanístic de Catalunya (MUC), que, de manera contínua, homogènia i sintètica, permet la consulta de les principals determinacions del planejament urbanístic general vigent a Catalunya, és un dels elements essencials del sistema d'informació urbanística de Catalunya. Aquest instrument orientat a la recollida, explotació, anàlisi i difusió

---

<sup>51</sup> Entrada en vigor: 5 de desembre de 2019.

de les dades urbanístiques esmentades requereix una actualització constant per incorporar les successives modificacions o revisions del planejament.

A fi que aquesta actualització es pugui dur a terme d'una manera immediata a partir de l'aprovació definitiva de cada instrument de planejament urbanístic general, és fonamental que la presentació de la documentació en format digital als òrgans urbanístics de la Generalitat d'aquests instruments, a l'efecte d'aprovació definitiva, inclogui el compendi de determinacions urbanístiques que han de representar-se en el mapa, seguint els requeriments tecnològics i els codis homogenis utilitzats per aquest sistema d'informació integrat.

Aquesta mesura pot contribuir a millorar la transparència i la simplificació de l'ordenament urbanístic, ja que l'establiment d'un llenguatge comú d'aplicació a tot el territori pot facilitar de manera important la comprensió i l'aplicació dels plans.

L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació del sòl que han de seguir els instruments de planejament urbanístic es detalla en l'annex I d'aquesta ordre i ha d'instaurar-se a partir de l'aprovació d'un nou instrument de planejament urbanístic general, d'un nou pla parcial urbanístic o d'un nou pla de millora urbana.

Respecte als requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic als òrgans urbanístics de la Generalitat a l'efecte d'aprovació definitiva o a l'efecte del lliurament previst en l'article 88 de la Llei d'urbanisme, es concreten en la inclusió d'una carpeta digital, denominada Estàndard del Mapa Urbanístic de Catalunya, estructurada d'acord amb el model normalitzat de l'annex II.

Aquests requeriments són exigibles en tots els instruments de planejament urbanístic general, en els plans parcials i en els plans de millora urbana i en les modificacions que es presentin als òrgans urbanístics de la Generalitat amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre. Si un instrument de planejament

urbanístic general no té les claus urbanístiques normalitzades, la carpeta de l'Estàndard del Mapa Urbanístic de Catalunya s'ha de completar amb la corresponent taula d'equivalències.

## 9. Altres normes i actuacions d'interès des del punt de vista ambiental

Pel que fa a subvencions, cal subratllar l'aprovació de les bases de nombroses convocatòries per a l'atorgament de subvencions en àmbits sectorials diversos (són destacables les atorgables a administracions públiques sobre il·luminació exterior<sup>52</sup>, vegetació en urbanitzacions<sup>53</sup> i pel que fa al reciclatge de residus<sup>54</sup> i les previstes per a les comunitats de regants<sup>55</sup> i agrupacions de defensa forestal<sup>56</sup>).

També són importants les subvencions convocades dirigides al desenvolupament rural<sup>5758</sup>.

---

<sup>52</sup> DOGC del dia 23/03/2020. Resolució TES/753/2020, de 12 de març, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018 i 2019 o a realitzar durant l'any 2020 (ref. BDNS 500441).

<sup>53</sup> S'ha publicat al DOGC del dia 19/12/2019 la Resolució ARP/3506/2019, d'11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2020 (ref. BDNS 486885).

<sup>54</sup> Resolució TES/757/2020, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals existents, situats en l'àmbit territorial de Catalunya. L'objecte d'aquestes bases és la implementació de millores en les instal·lacions públiques existents de tractament mecànic i biològic de la fracció resta i la fracció orgànica dels residus municipals. També s'ha publicat al DOGC el dia 12/17/2019 la Resolució TES/3484/2019, de 5 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a ens locals de Catalunya per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 485.767).

<sup>55</sup> DOGC del dia 28/04/2020. Resolució ARP/904/2020, de 21 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d'octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS 503741).

<sup>56</sup> DOGC del dia 14/04/2020. Resolució ARP/828/2020, de 2 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2020 (ref. BDNS 502271).

<sup>57</sup> DOGC del dia 11/25/2019. Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

<sup>58</sup> DOGC del dia 11/14/2019. Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014- 2020 per a l'any 2020 (ref. BDNS 481.382). També al DOGC del dia 10/15/2019, Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

